

El otoño mexicano

The Mexican Autumn

Carlos Illades*

Resumo

Com o retorno do Partido Revolucionário Institucional (PRI) à presidência da república em 2012, os movimentos sociais no México se reativaram. Primeiramente, o movimento #Yo soy 132, que protestava contra a aliança da televisão privada com o PRI; depois, a mobilização do magistério dissidente, contra a reforma educacional; mais adiante, a conformação de grupos de autodefesa comunitária (melhor conhecidos como “Policia Comunitaria”) para enfrentar o crime organizado; e, por último, a mobilização social pelo desaparecimento de 43 estudantes da Normal Rural de Ayotzinapa. Esta última, à qual se agregou o efeito acumulado dos outros movimentos, configura o Outono mexicano, expressão de uma sociedade castigada pela violência criminal e insatisfeita com a incapacidade do Estado de cumprir suas funções básicas.

Palavras-chave: movimentos sociais; Ayotzinapa; violência

Abstract

Since the Institutional Revolutionary Party (PRI – Partido Revolucionario Institucional) returned to the Presidency of the Mexican Republic in 2012, social movements have reawakened. First, the #Yo soy 132 movement, that protested against the alliance between PRI and corporate media. ; then, the dissident teachers’ mobilization, against the educational reform; later on, the conformation of communitarian self-defense groups (best known as “Communitarian Police”) to stand up to organized crime; and last, the social mobilization for the disappearing of 43 students that belonged to the Normal Rural from Ayotzinapa. This one, considering the accumulated effect of the others previous movements, configures the Mexican Fall, expression of a society castigated by the criminal violence and discontent with the inability of the State to execute its basics functions.

Keywords: social movements; Ayotzinapa; violence

* Universidad Autónoma Metropolitana, México.

Las crisis económicas internacionales de 2008 y 2011 no sólo provocaron el empobrecimiento de millones de personas sino que dejaron maltrecha la reputación de la clase política. Y no era para menos: la asociación entre los negocios corruptos del gran capital y los políticos venales que los hizo posibles dejó claro que éstos no se debían precisamente a sus electores. Ya el conde de Saint-Simon consideraba a los políticos parte de las clases parasitarias y actualmente crece la certeza de que la economía acabó con la autonomía de la política¹.

Pese a su nutrida base social, el régimen de la Revolución mexicana no consolidó la fama pública de la clase política, antes bien alimentó la convicción de que la honradez no figuraba entre sus virtudes cívicas. Cabría pensar que la legitimidad democrática habría mejorado la opinión con respecto de los políticos pero, a juzgar con las encuestas sobre la confianza en las instituciones, los partidos políticos consistentemente se colocan en el último lugar en cuanto a confianza ciudadana se refiere. Y, en lo que debería de haberse leído con preocupación, la elección intermedia de 2009 – en la que se realizó una campaña tenaz en contra del *establishment* político – sumó casi dos millones de boletas en blanco, la cifra más alta de la que se tenga registro. Para 2013, la 1ª Encuesta Iberoamericana de Juventudes mostró que los jóvenes españoles y mexicanos eran quienes recelaban más de las instituciones y, a no dudar, de la clase política².

El desencanto juvenil no se explica por un *ethos* rebelde inherente a esa etapa de la vida (cuando convocaba Daniel Cohn-Bendit a desconfiar de los mayores de 30 años)³, sino que responde sobre todo a que los jóvenes se inscriben en la franja de edad más castigada por el paupérrimo crecimiento de la economía mexicana durante las tres últimas décadas, a que son ellos víctimas frecuentes de la extorsión policial y, actualmente, reserva de brazos del crimen organizado. No sorprende por tanto que en 1986, 1999, 2012 y 2014 la juventud universitaria adquiriera protagonismo. En los dos primeros, por conservar la *cuasi* gratuidad de la enseñanza pública; después, contra la alianza de la televisión privada con el PRI; ahora, en torno a la demanda de la presentación con vida de los 43 alumnos desaparecidos en Iguala la noche del 26 de septiembre de 2014.

Además, tenemos la reactivación del movimiento magisterial a causa de la reforma educativa la cual rebasó con mucho a las respuestas sociales contrarias a las demás reformas estructurales (la energética, por ejemplo), donde se anticipaba una resistencia mayor dado el poderoso referente del nacionalismo revolucionario en el imaginario colectivo. Sin embargo no ocurrió así: fue más intensa

¹ Cf. Touraine, 2013, p. 37; Jameson, 2013, p. 173; Agamben, 2012, p. 33; Žižek, 2013, p. 23; Castells, 2012 p. 21; Iglesias, 2014, p. 155.

² Cf. “Jóvenes mexicanos, los que menos confían en las instituciones”, *Milenio*, 22 de agosto de 2013.

³ “Mito marchito” lo llama Bartra, 2011, p. 106.

una reivindicación sectorial que otra con raigambre histórica – concibámosla o no como mito – y que concernía a un segmento mayor de la ciudadanía.

Pero la movilización social no se redujo a las ciudades. En algunas regiones con gran presencia del crimen organizado se formaron grupos de autodefensa para resguardar a la población. Si bien el fenómeno no es nuevo – basta recordar la resistencia armada a las guardias blancas de caciques y terratenientes – lo que destaca es la rapidez con que se extendieron las autodefensas comunitarias y su alcance geográfico. Incluso en lugares como Tepalcatepec, Michoacán, la movilización armada tuvo visos de insurrección popular. De allí la premura del gobierno federal por restablecer el control y concebir la fantasía de un Estado de derecho en la entidad.

Más allá del obvio carácter violento de las autodefensas, colocadas en el límite por la violencia criminal y un Estado omiso (una forma de violencia también, según los estudiosos), destaca que aquel repertorio sea utilizado frecuentemente en la acción colectiva. Posiblemente el fenómeno esté relacionado con que la sociedad mexicana haya naturalizado la violencia, además de que este recurso permite una economía de medios a los movimientos sociales produciendo efectos inmediatos (Tarrow, 2012, p. 180). Podríamos agregar también que el desprestigio de la clase política en su conjunto – por su cercanía con el mundo del dinero, lícito o ilícito, y en consecuencia con la corrupción – lleva a asumir que no hay diferencias sustantivas entre los partidos y, por tanto, la inexistencia de opciones para el cambio que no pasen por la acción directa. De ser así, no considero que este repertorio violento domine ya la movilización social pero, sin duda, incide en el imaginario colectivo superior a sus fuerzas (vía las imágenes de la televisión o de la prensa, y del rechazo que provoca en los sectores no movi- lizados) dándole la oportunidad de someter a los demás actores participantes.

¿Qué ha pasado en los últimos años que explique la reanimación y radicalización de los movimientos sociales? ¿Por qué otra vez los jóvenes están tomando las calles? ¿Cómo ha reaccionado la sociedad civil organizada ante el regreso del PRI? ¿Por qué crecen las formas violentas de acción colectiva? ¿Cuál es la respuesta estatal hacia la movilización social? ¿Qué consecuencias tiene ésta para la germinal democracia mexicana? Estas son algunas de las preguntas que orientan este texto que, más que ofrecer respuestas, intenta aportar algunos elementos al debate público.

#Yo soy 132

La matanza de la Plaza de las Tres Culturas marcó por generaciones la imagen que los jóvenes universitarios tendrían del régimen (autoritario, represor, corrupto e ineficaz) y permitió identificar el objetivo visible de la acción colectiva. El Leviatán mexicano era el responsable de los problemas y, al mismo tiempo,

el único capaz de resolverlos. Se dudaba tanto de su capacidad como de su buena disposición, lo que no impedía exigirle resultados puntuales. Tampoco se le permitió olvidar el 2 de octubre. Cercana la alternancia, el gobierno priísta tuvo que hacerse cargo de la huelga estudiantil que paralizó la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) cerca de un año. Por su parte, las administraciones del Partido Acción Nacional (PAN) no enfrentaron acciones estudiantiles de consideración, aunque sí importantes movilizaciones sociales (Atenco, Oaxaca), la oposición de izquierda más poderosa de que se tenga memoria y la protesta pacífica de los familiares de las víctimas de la desquiciada guerra contra del narcotráfico que Felipe Calderón Hinojosa emprendió sin ningún cálculo sensato de las consecuencias. Mientras que el retorno del PRI al gobierno federal reavivó al movimiento estudiantil, puso en marcha al magisterio y en pie de guerra a las autodefensas comunitarias.

En un acto de campaña que parecía rutinario, frente a un público habitualmente dócil, el candidato que iba adelante en las encuestas Enrique Peña Nieto salió furtivamente del *campus* de la Universidad Iberoamericana después de ser increpado por los estudiantes a propósito de la represión en San Salvador Atenco, quienes le gritaban “cobarde, la Ibero no te quiere”. Las televisoras editaron los momentos escabrosos del encuentro en Santa Fe, por lo que la indignación cundió entre los estudiantes al contrastar la experiencia matutina con lo que aquéllas transmitieron por la noche, calificando el incidente como un “motín porril”. Y, ante la acusación de la jefatura priísta de que eran individuos ajenos a la institución, 131 estudiantes mostraron en un video sus credenciales, además de decir su número de matrícula y nombre. Para la noche, “el hashtag ‘#131 alumnos de la Ibero’ se había convertido en *trending topic* mundial”⁴. Nació así el movimiento #Yo soy 132.

El movimiento fue efímero, en parte por su horizontalidad, escasa estructuración y autonomía irrestricta de cada una de las asambleas locales, lo que provocó que cada una hablara por sí misma, pero que se interpretara como si lo hiciera a nombre del conjunto (al fin y al cabo todas eran #Yo soy 132), confundiendo a la opinión pública y perdiendo eficacia sus mensajes; también, debido a que redujo su horizonte a la elección constitucional de 2012, quedándose sin propuesta para el día después. No obstante, animó una contienda deslucida en la que se anticipaba la victoria del PRI y, por vez primera, hizo marchar unido al alumnado de las universidades públicas y privadas. De acuerdo con una crónica periodística, en la manifestación del 24 de mayo “la avenida Reforma se llenó de

⁴ Cf. “La Ibero no te quiere”, *Reporte Índigo*, 11 de mayo de 2012; cit. Estrada Saavedra, 2014, p. 93; “No somos porros ni acarreados, responden alumnos de la Ibero que increparon a Peña”, *La Jornada*, 15 de mayo de 2012; De Mauleón, 2012; “La autocomunicación de masas proporciona la plataforma tecnológica para la construcción de la autonomía del actor social...” Castells, 2012, p. 24.

pancartas en las que los alumnos del Tecnológico de Monterrey, la Universidad Autónoma Metropolitana, el Instituto Politécnico Nacional e inclusive de otros estados se pronunciaban en contra del monopolio mediático”. Varias paradas frente a los corporativos rubricaron la convicción de que la televisión manipulaba las noticias surgiendo la consigna de “apaga la tele y prende la verdad”⁵.

La deficiente coordinación del movimiento, el escaso control sobre sus bases y la falta de un núcleo de activistas medianamente profesionalizados (con una representatividad incuestionable) permitió ganar posiciones a los grupos radicales, mejor organizados que el alumnado que por primera vez se manifestaba en el espacio público. El resultado electoral puso en acción a aquellos grupos que se hicieron presentes en la marcha del 7 de julio, la cual, no obstante la numerosa concurrencia, evidenció la fragmentación del movimiento estudiantil. A la vez que el #Yo soy 132 se deslindó con antelación de la convocatoria “por considerar que era un intento de utilizarlos con fines personales y partidistas”, una profusa propaganda con su nombre circuló en redes sociales y se fijó en las estaciones del metro. “Queremos democracia, no telenovelas”, sentenciaba una manta, mientras un joven escaló la Estela de Luz a manera de protesta⁶.

Con la entrada en escena de los radicales, autodefinidos como “anarquistas”, la protesta social dirigida en principio contra la asunción de Peña Nieto abrió una vertiente antiestatal además de confrontada con el poder económico. Sin embargo, el nuevo énfasis se confundió en la maraña de eventos ocurridos el 2 de diciembre y en las múltiples interpretaciones que ofrecieron actores y medios. Abundaron acusaciones, deslindes y evidencias (objetivas o fabricadas), pero de lo que no hay duda es de la impericia y brutalidad policial, además de la presencia “de varios grupos de personas embozadas, con máscaras antigás y paliacates, que intentaban derribar las barricadas instaladas desde hace una semana sobre la avenida Eduardo Molina”. Horas más tarde, “los choques entre policías y anarquistas llegaron a la esquina de Reforma y Bucareli, donde un grupo compacto de personas con el rostro cubierto destrozó cajeros automáticos y los vidrios de un edificio de Bancomer y oficinas alternas de *El Universal*”. Aparte de decenas de heridos y consignaciones arbitrarias, un activista sufrió una herida fatal por un proyectil detonado por las fuerzas del orden⁷.

⁵ Cf. “Marcha Yo soy 132 toma las calles de México”, *El Economista*, 24 de mayo de 2012; “#Yo soy 132 pide ‘apagar la tv y encender la verdad’”, *La Jornada*, 14 de junio de 2012. Cabe señalar que la primera mención de una marcha contraria a Peña Nieto apareció en un tuit el 1 de mayo. De Mauleón, “De la red a las calles”, 2012.

⁶ Cf. “Protestan contra la ‘imposición’”, *El Universal*, 8 de julio de 2012; “Miles de personas protestan contra Peña Nieto en mega marcha”, *El Economista*, 7 de julio de 2012.

⁷ Cf. “Enfrentamientos dejan 121 heridos”, *El Universal*, 2 de diciembre de 2012; “Muere el activista Kuykendall, herido en el operativo policiaco del 1 de diciembre de 2012”, *La Jornada*, 26 de enero de 2014. Para más sobre estos grupos véase Illades, , 2014b.

“Ese puño sí se ve”

Con el paro de 2008, la disidencia magisterial había articulado una poderosa resistencia frente a la Alianza por la Calidad Educativa, intento del presidente Felipe Calderón por regular la carrera docente, para lo cual signó un acuerdo con la maestra Elba Esther Gordillo, aliada estratégica del panismo desde la campaña presidencial de 2006. En Morelos fue donde cobró vigor la movilización de los mentores quienes realizaron una manifestación multitudinaria en Cuernavaca el 23 de agosto. Iniciada días atrás, la suspensión de labores se prolongó un par de meses. En octubre, varias secciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) realizaron un plantón en el centro de la ciudad de México para obtener la derogación de aquel convenio⁸. No lo consiguieron, pero lograron neutralizarlo.

La reforma educativa de 2012 midió fuerzas entre la nueva administración priísta y la CNTE. Del paquete de reformas estructurales realizadas por el gobierno federal, la que provocó mayor resistencia fue justamente ésta, debido quizá a que el adversario en turno estaba curtido en la lucha y contaba con una fuerte cohesión gremial, mezcla de prácticas autoritarias, prebendas y genuina adhesión de sus bases⁹.

Dirigida a recuperar el control de la gestión educativa por parte de la Secretaría de Educación Pública (SEP), mediante la introducción de mecanismos de evaluación de los profesores, la reforma logró imponerse con la aquiescencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), doblegado por la consignación penal de su presidenta vitalicia, y con una fuerte oposición de la CNTE, especialmente en los estados de Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Michoacán. Sumando la participación marginal de otras, las secciones magisteriales de estos estados tuvieron en vilo a la población de la ciudad de México durante cuatro meses y, por tiempo indefinido, a las de sus respectivas entidades.

Tras la aprobación de la reforma por el Congreso local, los enfurecidos mentores destrozaron en Chilpancingo las sedes del Partido Acción Nacional (PAN), Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Partido Revolucionario Institucional (PRI) el 24 de abril de 2013. Por la mañana, cerca de dos mil profesores de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) agredieron el local de Acción Nacional con “piedras, tubos y palos” y el de la Revolución Democrática, atacado en una acción anterior, recibió “bombas molotov” y fue parcialmente incendiado. Cerca de las tres de la tarde, en el edificio del

⁸ Cf. “Marchan 20 mil maestros contra la alianza educativa en Morelos”, *La Jornada*, 23 de agosto de 2008; “Deja plantón de maestros pérdidas de mil 500 millones de pesos en Morelos”, *El Universal*, 10 de octubre de 2008; “Bloqueo plantón tránsito en las inmediaciones de la SEP”, *El Universal*, 9 de octubre de 2008.

⁹ Cf. Para el caso de Michoacán, la mecánica gremial está bien expuesta en Rivera Velázquez, 2013, pp. 47-48.

Revolucionario Institucional, los profesores disidentes “destruyeron todo lo que encontraron a su paso, incluyendo el equipo de cómputo, para después rociar gasolina y quemar el lugar”¹⁰.

Al comenzar el ciclo escolar 2013-2014, alrededor de dos millones de alumnos de educación básica y media se quedaron sin clases por el paro magisterial en las cuatro entidades ya mencionadas. Tan sólo en Oaxaca, la cifra rondó un millón 300 mil. Además de la abrogación de la reforma educativa, la sección 22 de la CNTE reclamaba en el estado sureño hacer lo propio con la reforma laboral y procesar penalmente a Ulises Ruiz por los asesinatos de 2006. A los pocos días, los maestros inconformes bloquearon los accesos al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y amagaron con permanecer en la plancha del zócalo durante las fiestas patrias, sitio que ocupaban desde el 9 de mayo. Focos rojos se encendieron tanto en el gobierno federal como en el capitalino que, mediante un operativo policial, “limpiaron” la Plaza de la Constitución. Concluida la recuperación de este espacio público – perdido a partir de entonces por los movimientos sociales a consecuencia de la intransigencia de la CNTE – “grupos de embosados, simpatizantes del magisterio y los autodenominados ‘anarquistas’ se confrontaron con elementos de la policía federal”¹¹. De allí, hasta hoy, quedó un campamento en el Monumento a la Revolución como embajada de los mentores en la capital de la república.

El pueblo armado

La tercera pista por la que transitó la acción colectiva fue la seguridad, o la inseguridad, para darle un nombre más adecuado. Si bien ésta se disparó desde 2008, cuando crecieron vertiginosamente las ejecuciones, los daños a la población civil no eran todavía evidentes. Las masacres de Villas de Salvácar (Ciudad Juárez), contra estudiantes de bachillerato, y San Fernando (Tamaulipas), victimando a migrantes centroamericanos, ambas en 2010, permitieron ver a la sociedad que la violencia no era sólo entre criminales, recusando la lógica ingenua según la cual el crimen, como el mercado, se regulan por sí mismos¹².

La policía comunitaria se formó ante el despliegue de las fuerzas armadas para combatir a la guerrilla en la Montaña guerrerense en el gobierno de Ernesto Zedillo, acción que multiplicó la inseguridad y violación a los derechos humanos. En la década siguiente, esta policía se extendió en otros espacios geográficos

¹⁰ Cf. “Incendian Guerrero; destruyen sedes locales de partidos políticos”, *Excélsior*, 24 de abril de 2013.

¹¹ Cf. “Mega paro magisterial: dos millones de niños sin clases en cuatro estados”, *Proceso*, 19 de agosto de 2013; “Maestros bloquean inmediaciones del aeropuerto del DF”, *El Universal*, 23 de agosto de 2013; “Detienen federales a 31 tras el desalojo”, *El Universal*, 14 de septiembre de 2013.

¹² Cf. Hope, 2013, pp. 39-40; Illades & Santiago, 2014, pp. 106 y ss.

para enfrentar a bandas de asaltantes, abigeos, talamontes y al crimen organizado, frecuentemente asociados en una especie de “cadena productiva” en la que unos complementan a otros. El 14 de junio de 2009, el Congreso Nacional Indígena proclamó el derecho de los pueblos originarios a la autodefensa; pero fue el asesinato de dos comuneros a manos de talamontes, en abril de 2011, y la escasa disposición de los gobiernos estatal y federal de enviar a la fuerza pública para proteger a los habitantes de Cherán, en la Meseta Purépecha, lo que provocó que éstos bloquearan con barricadas los accesos a la comunidad. Para febrero del año siguiente, los cheranenses instalaron un concejo municipal en remplazo de la inoperante administración municipal anterior. En tanto que el asesinato de un taxista en octubre de 2012 por parte de una banda de delincuentes motivó a los ciudadanos de Olinalá, y otros poblados guerrerenses próximos al estado de Puebla, a formar más policías comunitarias, colocar retenes, suspender clases y establecer un toque de queda parcial para resguardarse de los criminales. A diferencia de las primeras que se formaron en Guerrero, éstas utilizaban armas de alto poder¹³.

A las policías comunitarias, habilitadas para defender a los pueblos, se agregaron a autodefensas ciudadanas que, además de ese cometido, se dieron a la tarea de batir a los delincuentes fuera de sus comunidades, aumentando la escala de los enfrentamientos armados. La Unión de Pueblos y Organizaciones Sociales del Estado de Guerrero (UPOEG) se constituyó en 2011; demandaba la implantación de una tarifa única preferencial de luz “para los municipios con presencia indígena y afroamericana en las regiones de la Montaña, Costa Chica, Norte y Centro”. Contó con una agenda social más amplia, que incluía planes de desarrollo social y seguridad pública. Concebida como gestora de los asuntos comunitarios ante el gobierno, la organización también buscaba articular “las demandas de los pueblos y comunidades, en materia económica, política, social y cultural desde la perspectiva comunitaria”, sustentando sus acciones “en el diálogo y acuerdo con los diferentes entes públicos en sus tres niveles y con los principales actores sociales” (UPOEG, 2014, pp. 1-2).

El incremento sustancial de la violencia criminal en la entidad movió a la UPOEG a constituirse como autodefensa de manera tal que, contando con la anuencia del empresariado local, en enero de 2014 se trazó el objetivo de recuperar la capital estatal de manos del crimen organizado, dominado en ese momento por el grupo de los Rojos. Un mes antes, el Consejo General de Autodefensas y Comunitarios de Michoacán, con presencia en 22 municipios, había iniciado una ofensiva contra el grupo criminal conocido como los Caballeros Templarios.

¹³ Cf. “Cherán, a la espera de fuerzas federales”, *El Universal*, 13 de mayo de 2011; “Barricadas y toque de queda en Olinalá: toman el ayuntamiento”, *La Jornada*, 1 de noviembre de 2012.

Ya en febrero de ese año, núcleos armados encabezado por Juan Manuel Mireles Valverde, médico general de la Clínica de Salud de Tepalcatepec, e Hipólito Mora, mediano agricultor de Buenavista Tomatlán, lograron expulsar a los Templarios de sus poblaciones¹⁴.

“Vivos se los llevaron, vivos los queremos”

El “estamos hasta la madre” – título de la carta abierta de Javier Sicilia “a los políticos y los criminales” – irrumpió sonoramente en 2011. Con esa elocuente expresión de hartazgo, el Movimiento de la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD) señaló los monstruosos costos humanos que la guerra contra el narcotráfico endosaba a la sociedad, en nombre de la cual, paradójicamente, el presidente Calderón Hinojosa tomó la determinación de emprenderla. Pese a la gran expectativa que generó el encuentro de junio en el alcázar del Castillo de Chapultepec, descrito en el *twitter* del michoacano como “experiencia intensa y aleccionadora”¹⁵, en realidad no dejó lección alguna al gobierno federal, a no ser algunos acuerdos que quedaron en letra muerta. La estrategia para enfrentar el crimen organizado no cambió y, al final del sexenio, la administración panista fue incapaz siquiera de dar una cifra confiable con respecto del número de víctimas (muertos, desaparecidos, desplazados, etcétera).

A pesar de que con el retorno del PRI la estrategia contra el crimen ha sido básicamente la misma de la gestión anterior, tanto el énfasis en las reformas estructurales como la emergencia de los movimientos sociales a los que nos hemos referido situaron en un plano secundario del discurso público los problemas de derechos humanos y la penetración del crimen organizado en distintas esferas estatales. Sin embargo, la ejecución extrajudicial de 21 presuntos delincuentes por parte del ejército, el 30 junio de 2014 en San Pedro Limón (Tlatlaya, Estado de México), y el asesinato de 6 personas en Iguala, el 26 de septiembre, más la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos (Ayotzinapa) hicieron que aquellos asuntos pendientes refrendaran su vigencia, incluso agravados por la inacción gubernamental. Tlatlaya, pero más que nada Ayotzinapa, dieron la vuelta al mundo consternado a la opinión pública internacional. Y, en México, provocaron expresiones de solidaridad e indignación no vistas desde 1968 o 1985.

¹⁴ Cf. Illades & Santiago, 2014, pp. 135 y ss. Con respecto de las autodefensas michoacanas, un experto en seguridad las caracteriza como “un movimiento impulsado por productores agrícolas y empresarios locales que logró encauzar el descontento de otros sectores de la población de Tierra Caliente frente a los abusos de los criminales, en un contexto en que ninguna autoridad le ponía freno”. Guerrero Gutiérrez, 2014, p. 49.

¹⁵ Cf. Sicilia, 2011, p. 159; “Diálogo con Sicilia, ‘intenso y aleccionador’: Calderón”, *Proceso*, 24 de junio de 2011.

Varias razones configuraron la masacre de Iguala como un acontecimiento límite dentro de la conciencia nacional. Para empezar, la evidencia de que la fuerza pública responde a las órdenes del crimen y actúa en contra de la sociedad. En segundo término, porque se trataba de jóvenes pobres de una de las entidades más abandonadas del país. También, debido a la incapacidad (incluso discursiva) del Estado, que no puede proteger a la población y ni siquiera realizar una investigación medianamente certera, profesional y aseada de los hechos sangrientos. Además, como acabamos de señalar, por la intención deliberada de la administración federal de silenciar la violencia en los medios de comunicación, tomando los sucesos de Iguala por sorpresa a una opinión pública “bombardeada” con el relato diario de los éxitos gubernamentales (“Mover a México) y de la concordia de las principales formaciones políticas (el Pacto por México). Por último, gracias a la enorme cohesión grupal y capacidad de movilización de los normalistas de Ayotzinapa, ventaja comparativa en relación con las víctimas de otros crímenes masivos (i.e., San Fernando).

La movilización por Ayotzinapa ha sumado todos los actores de las acciones colectivas de los tres últimos años (estudiantes, maestros y autodefensas), con su componente pacífico y violento. Por tanto, la fuerza de la protesta actual no únicamente reside en el eco de la consigna “Vivos se los llevaron, vivos los queremos” – lema del Comité Eureka, de Rosario Ibarra de Piedra –, sino en el efecto acumulativo de las demás movilizaciones. Esta consigna, creo, provee de contenido a lo que Ernesto Laclau llamó “significante vacío”, espacio en el que se unifican las demandas particulares dentro del campo popular: es una y todas a la vez (Laclau, 2005, pp. 124-125).

Por simple contraste, la dimensión del acontecimiento empequeñeció a la de por sí menguada clase política que, desde las respectivas posiciones, siglas partidarias, corriente o tribu, únicamente atinó a deslindarse de la “barbarie”. Ocurrió una tragedia, en principio no había responsable alguno, sólo víctimas. Mientras aquella mostraba la sagacidad del avestruz, comenzó la movilización social en Chilpancingo, tomando como blancos al gobernador y al munícipe de Iguala. De allí en adelante, la CETEG llevaría la batuta en la capital guerrerense, fungiendo como el basamento organizado en la que se apoyaron las demás fuerzas sociales, entre ellas, los combativos estudiantes y padres de Ayotzinapa. Y, con su repertorio violento, la disidencia magisterial tiñó el conjunto de la movilización en aquella ciudad. El 29 de septiembre, aproximadamente tres mil personas marcharon hasta llegar a la sede del Congreso local “para exigir se aplique juicio político al gobernador Ángel Aguirre Rivero y al presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca Velázquez”. Concluido el mitin, jóvenes de la Federación de Estudiantes Campesinos y Socialistas de México (FECSM) “rompieron cristales de la entrada de la biblioteca”. Simultáneamente, hubo una pequeña manifestación en Acapulco. Por la noche, alrededor de mil personas marcharon de nueva

cuenta en Chilpancingo, portando velas “para exigir a los gobiernos federal y estatal que se haga justicia a los normalistas asesinados... además del futbolista David Josue García Evangelista, quien murió ese mismo día, y para las otras dos víctimas de la agresión armada en Iguala”¹⁶.

Mucho mayor fue la manifestación del 2 de octubre en Chilpancingo, en la que el contingente ocupó un tramo superior a los tres kilómetros de la Autopista del Sol. Hicieron acto de presencia los estudiantes del FECSM, los profesores de la CETEG, docentes y alumnos de la Universidad Autónoma de Guerrero y el Colegio de Bachilleres, campesinos, amas de casa, estudiantes y padres de familia de Ayotzinapa. La protesta exigió la presentación con vida de los 43 desaparecidos en Iguala, reiterando la demanda de separar a Aguirre Rivero del cargo y procesar penalmente a Abarca Velázquez y al secretario de seguridad pública municipal Felipe Flores Velázquez, primo del alcalde igualteco. No hubo más que unas pocas pintas en los edificios públicos y, en Morelia, cerca de cinco mil personas que conmemoraron la matanza de la Plaza de las Tres Culturas ofrecieron respaldo a los normalistas guerrerenses. Un día antes, los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) habían marchado hacia la secretaría de Gobernación exigiendo la derogación del reglamento interno, la cancelación de los nuevos planes de estudio y la renuncia de la directora de la institución¹⁷. Para este momento, Abarca y su jefe de seguridad ya habían escapado (no había orden de aprehensión en su contra), el gobernador guardaba silencio y la administración federal seguía sin responder ni iniciar investigación alguna.

La FECSM ocupó transitoriamente las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del estado, pegando en las paredes las fotografías de los desaparecidos el 7 de octubre. Los agentes de la policía ministerial encargados de resguardar el inmueble huyeron cuando se aproximaban alrededor de 500 estudiantes dispuestos a tomarlo por la fuerza. Posteriormente, en compañía de los padres de familia, se trasladaron a la Autopista del Sol, donde permitieron el paso libre a los automovilistas en la caseta de peaje. Esa tarde, 300 integrantes de la UPOEG – autodefensa guerrerense –, iniciaron la Caravana por el desarrollo y la paz en dirección a Iguala, para después incorporarse a la búsqueda de los desaparecidos iniciada por la administración estatal. Ese mismo día, el presidente nacional del PRD, Carlos Navarrete, ofreció una “sentida” disculpa a los padres de los jóvenes desaparecidos. Para entonces, el gobierno federal había realizado las primeras

¹⁶ Cf. “Miles demandan en Chilpancingo juicio político al gobernador Aguirre Rivero”, *La Jornada*, 30 de septiembre de 2014.

¹⁷ Cf. “Megamarcha en Chilpancingo en demanda de hallar normalistas”, *La Jornada*, 3 de octubre de 2014; “Huélum en completo orden; se organizan para evitar infiltraciones de porros”, *Excélsior*, 1 de octubre de 2014.

detenciones, comenzando por 22 policías municipales, y el Ejército Popular Revolucionario (EPR) hablaba ya de “un crimen de Estado”¹⁸.

El día 8 de ese mes, el movimiento tuvo respuesta fuera de la entidad – en aproximadamente 25 estados –, coreándose la consigna “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”. De acuerdo con la prensa, “las movilizaciones tuvieron lugar tanto en pequeños municipios, donde se reunieron 300 personas, hasta en ciudades como en Guadalajara, donde se concentraron alrededor de 7 mil ciudadanos”. En San Cristóbal de las Casas, cerca de 20 mil neozapatistas realizaron una marcha silenciosa a manera de duelo. Guanajuato y León, poco afectados a este tipo de actos, congregaron a más de dos mil estudiantes y ciudadanos portando veladoras y pancartas, indignados también por el asesinato de un estudiante a manos de la policía. Por segundo día consecutivo, una multitud en Chilpancingo tomó la calle reiterando sus exigencias. En Tlapa de Comonfort, media centena de jóvenes atacaron el palacio municipal. Y en la Ciudad de México, miles de personas exigieron la aparición de los normalistas y la salida de Aguirre Rivero. Se sumaron a la protesta intelectuales y dirigentes de la izquierda. Cuauhtémoc Cárdenas fue abucheado y agredido por un pequeño grupo que lo llamó cobarde, traidor y asesino. Únicamente cuando el reclamo traspasó las fronteras guerrerenses, el presidente Peña Nieto aludió el problema al advertir “señales de debilidad institucional en algunas partes del país”¹⁹.

La CETEG inició un paro de labores el 9 de octubre y, al día siguiente, una concentración en Chilpancingo insistió en la destitución de Aguirre Rivero, convocando a una “asamblea popular” para el día 15. Por su parte, el Congreso local comenzó el proceso parlamentario para retirar el fuero constitucional a Abarca Velázquez. Los días 12 y 13 hubo movilizaciones en Chilpancingo y en otros puntos de la entidad. En la segunda, “estudiantes, maestros y padres de familia incendiaron oficinas y destrozaron ventanales en el Palacio de Gobierno estatal y en la sede del ayuntamiento...”. Dos días después, en Ayotzinapa, se formó la Asamblea Nacional Popular (ANP), con la participación de la CETEG y otras organizaciones sociales. Aparte de la presentación con vida de los normalistas, la destitución de Aguirre y la desaparición de poderes en la entidad, el objetivo de la agrupación era la instalación de “una asamblea constituyente del pueblo de Guerrero, creando las mejores condiciones que permita[n] dar propuestas políti-

¹⁸ Cf. “Toman normalistas la Procuraduría General de Justicia de Guerrero; exigen presentar vivos a los desaparecidos”, *La Jornada*, 8 de octubre de 2014; “Vuelve a Iguala el ‘usted disculpe’”, *La Jornada*, 8 de octubre de 2014; “‘Liberen a policías detenidos o aténganse a las consecuencias’, amenaza cártel en Iguala”, *La Jornada*, 7 de octubre de 2014; “EPR: ‘fue un crimen de Estado’”, *La Jornada*, 6 de octubre de 2014.

¹⁹ Cf. “Marcha en 25 estados para pedir justicia por Ayotzinapa”, *La Jornada*, 9 de octubre de 2014; “Miles exigen la aparición de los normalistas y la salida de Aguirre”, *La Jornada*, 9 de octubre de 2014; “Agresión a Cuauhtémoc Cárdenas”, *La Jornada*, 9 de octubre de 2014; “Hay señales de debilidad institucional en el país”, *La Jornada*, 9 de octubre de 2014.

cas, sociales y económicas, culturales, donde la democracia emane de la soberanía de los pueblos, trabajar con el nombramiento de un gobierno honorable”. En pocas palabras, refundar el estado. Ese mismo día, pero en Ciudad Universitaria, una concentración estudiantil de procedencia variada gritó las consignas “Justicia”, “Vivos los queremos” y “Fuera Peña”, dentro del primer paro general universitario de 48 horas²⁰.

El 17 de octubre una imponente manifestación recorrió la costera Miguel Alemán, en Acapulco, coreando la multitud “¡Sicarios y policías son la misma porquería!” y “¡El terror viene del Estado!”. En siete estados hubo también movilizaciones. Cinco días después, una marcha en Iguala, en la que participaron la CETEG y la FECSM, recorrió la ruta de los normalistas desaparecidos insistiendo en la renuncia de Aguirre, el castigo a Abarca y la desaparición de poderes en la entidad, demanda que, recién señalamos, había planteado la ANP. Los mentores incendiaron el palacio municipal y destrozaron la Plaza Tamarindos, propiedad del municipio igualteco. En otros puntos de la entidad también ocurrieron movilizaciones. El día 22 inició el segundo paro general universitario. Finalmente, el 23 Aguirre anunció que solicitaría licencia al Congreso local²¹.

Pero ni el desafuero de Abarca ni la licencia de Aguirre mermaron la movilización. El 5 de noviembre, en el zócalo capitalino, los estudiantes gritaron “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”, un insistente “¡Fuera Peña!”, al que se agregó “¡Fue el Estado!”, esto en el marco del tercer paro general universitario, ahora por 72 horas; surgió la propuesta de un paro nacional indefinido a partir del 20 de noviembre. En 22 estados se realizaron actos de protesta por Ayotzinapa. Y, un día después, presuntos neoanarquistas incendiaron un Metrobús y la estación Ciudad Universitaria, mientras en Chilpancingo contingentes del magisterio y de diversas organizaciones sociales tomaron el Palacio de Justicia estatal²².

La presentación de los resultados de la investigación por parte del procurador general de Justicia de la república, el 7 de noviembre, desató aún más la ira social: los normalistas habrían sido ejecutados por la banda criminal de los Gue-

²⁰ Cf. “Maestros, ejidatarios e la iniciativa privada piden la salida de Aguirre”, *La Jornada*, 11 de octubre de 2014; “‘En Guerrero no hay gobierno’, dicen empresarios y estudiantes”, *La Jornada*, 13 de octubre de 2014; “El gobierno ve a la guerrilla detrás de las movilizaciones en Guerrero”, *Proceso*, 19 de octubre de 2014; “Destrozos en el Palacio de Gobierno de Chilpancingo”, *La Jornada*, 14 de octubre de 2014; *Plan de acción de la Escuela Rural de Ayotzinapa y organizaciones sociales estatales en la Asamblea Popular #Ayotzinapa*, 2014; “Miles de universitarios manifestaron rabia e indignación por el caso Iguala”, *La Jornada*, 16 de octubre de 2014. Se citan los tres últimos.

²¹ Cf. “Más indignación por los 43 desaparecidos de Ayotzinapa”, *La Jornada*, 18 de octubre de 2014; “Marcha de 20 mil personas exige en Iguala justicia para los normalistas”, *La Jornada*, 23 de octubre de 2014; “La defenestración de Aguirre, paso a paso”, *Proceso*, 26 de octubre de 2014.

²² Cf. “¡Fuera Peña!, exigen miles en el zócalo”, *La Jornada*, 6 de noviembre de 2014; “En 22 estados, solidaridad con Ayotzinapa”, *La Jornada*, 6 de noviembre de 2014; “Incendian camión y estación del Metrobús Ciudad Universitaria: 2 detenidos”, *El Universal*, 6 de noviembre de 2014; “Toman organizaciones magisteriales y sociales oficinas federales y locales”, *La Jornada*, 7 de noviembre de 2014.

rreros Unidos y ni siquiera sería posible recuperar sus cuerpos cremados porque, de acuerdo con la hipótesis oficial, las cenizas se vertieron en el río Cocula. Ante los medios, lo único que el procurador presentó como evidencia fueron las declaraciones de tres presuntos delincuentes y escasos restos humanos calcinados, nada más que eso²³. Por la noche, jóvenes de distinta procedencia hicieron una parada en el Ángel de la Independencia, portaban veladoras y pancartas donde se leía “No fue el narco, fue el Estado”, “Fuera Peña”, “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”, reapareciendo el “estamos hasta la madre” del MPJD²⁴.

Ante la frustración de muchos por los pobres y adversos resultados, el día 8 la violencia arreció en la Ciudad de México y también en Chilpancingo. En la Capital Federal, presumiblemente un pequeño grupo de neoanarquistas intentó quemar la puerta principal de Palacio Nacional²⁵; apareció la consigna “¡Ayotzinapa vive! El Estado ha muerto”. Y, en la ciudad guerrerense, alrededor de 600 estudiantes de la FECSM incendiaron unas camionetas próximas al Palacio de Gobierno, el cual sufrió daños considerables. No obstante que había caído Aguirre Rivero, y ya con un gobernador interino, el Movimiento Popular Guerrerense (MPG), integrante hasta donde entendemos de la ANP, “acordó impulsar la desaparición de poderes en los tres niveles de gobierno y propuso crear comités ciudadanos municipales y concejos populares para gobernar desde las colonias, barrios y comunidades de los 81 municipios de la entidad”²⁶.

La policía comunitaria se manifestó en Chilpancingo el 9 de noviembre, día en que llegó a la ciudad de México la marcha 43 por 43 en caminata desde Iguala. Al siguiente día, normalistas encapuchados bloquearon por cuatro horas el acceso al aeropuerto internacional de Acapulco. El 12 la movilización de la CETEG incluyó quema de la sede del PRI –atacada, como vimos, en múltiples ocasiones – y el edificio del Congreso estatal, así como algunos automóviles. En solidaridad,

²³ Hasta el momento únicamente se han identificado los restos de uno de los estudiantes (Alexander Mora Venancio), pero, como indica el reporte de los peritos argentinos coadyuvantes del caso, “no hay suficiente certidumbre científica o evidencia física de que los restos recuperados en el río San Juan por peritos de la pgr y en parte por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), correspondan a aquellos retirados del basurero de Cocula, como indicaron los inculcados por la pgr. Se recuperaron restos humanos quemados y calcinados tanto en el río San Juan como en el basurero de Cocula. La evidencia que une a ambos sitios por ahora es esencialmente testimonial...” EAAF, “Identificación de uno de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa”, 7 de diciembre de 2014.

²⁴ Cf. “PGR: los 43 habrían sido ejecutados y calcinados”, *La Jornada*, 8 de noviembre de 2014; “Nace en el Ángel propuesta de un paro nacional”, *La Jornada*, 8 de noviembre de 2014.

²⁵ Días después, los estudiantes de la unam desenmascararon a uno de los participantes en la quema, comprobando que se trataba de un infiltrado. “Descubren estudiantes rostro de ‘infiltrado’”, *El Universal*, 17 de noviembre de 2014.

²⁶ Cf. “Vandalizan anarquistas contra Palacio Nacional”, *El Universal*, 9 de noviembre de 2014; “Esto apenas empieza, advierten normalistas”, *La Jornada*, 9 de noviembre de 2014.

al día siguiente, normalistas de Michoacán destrozaron la sede del PRI en Morelia y cerraron el aeropuerto, y los de Oaxaca retuvieron por un rato a los empleados de la Ciudad Judicial. Horas después, comerciantes y hoteleros de Acapulco solicitaron la intervención federal para impedir que la movilización social dañara más a sus negocios ahuyentando al turismo. Y el 15 de noviembre un contingente de la CNTE marchó al zócalo de la ciudad de México, en tanto que el día anterior la FECSM y la CETEG hicieron lo propio en Chilpancingo²⁷.

Mes y medio después de los acontecimientos de Iguala, por voz de uno de sus ministros, la Suprema Corte de Justicia de la Nación aludió a la masacre instando a los nuevos jueces a “hacer saber a los ciudadanos, en cada sentencia, en cada acuerdo, en cada decisión que tomemos, que escuchamos sus reclamos de justicia”. El Legislativo no se quedó atrás y, en el proyecto del presupuesto de egresos de 2015, asignó 400 millones adicionales a las normales rurales, etiquetando 50 millones para Ayotzinapa “con el fin de evitar que los alumnos tengan que salir a botear para sostener las actividades curriculares”²⁸. Después de una gira por China y Australia, en medio de la crisis más severa de su administración (aunque más bien para alejarse de ésta mientras su gabinete trataba de recomponer la situación), regresó Peña Nieto endurecido: en lugar de rendir cuentas²⁹, las pedía. Subiendo el tono, a poco denunció un “‘afán orquestado por desestabilizar al país’ y atentar contra el proyecto que impulsa su gobierno”³⁰.

²⁷ Cf. “Marcha la CRAC-PC para exigir la presentación con vida de 43 normalistas”, *La Jornada*, 10 de noviembre de 2014; “La justicia, otra desaparecida: integrantes de la marcha 43 por 43”, *La Jornada*, 10 de noviembre de 2014; “Manifestantes bloquearon cuatro horas las actividades en el aeropuerto de Acapulco”, *La Jornada*, 11 de noviembre de 2014; “CETEG quema sede del PRI en Chilpancingo”, *El Universal*, 12 de noviembre de 2014; “Maestros incendian pleno del Congreso de Guerrero y autos”, *El Universal*, 12 de noviembre de 2014; “Se expande protesta normalista en Morelia”, *El Universal*, 12 de noviembre de 2014; “Normalistas destrozaron sede del PRI en Morelia y cierran aeropuerto”, *La Jornada*, 13 de noviembre de 2014; “Piden en Acapulco intervenga el ejército; ‘no generaremos más violencia’, responde”, *La Jornada*, 14 de noviembre de 2014; “Marcha la CNTE del Monumento a la Revolución al zócalo”, *El Universal*, 15 de noviembre de 2014; “Marchan 8 mil personas en Chilpancingo para exigir que se presente con vida a normalistas”, *La Jornada*, 15 de noviembre de 2014.

²⁸ Cf. “Cimbra a México la violencia desmedida, afirma la Corte”, *El Universal*, 14 de noviembre de 2014; “Asignan a normales rurales \$400 millones adicionales”, *La Jornada*, 14 de noviembre de 2014.

²⁹ El reciente hallazgo periodístico de una costosísima residencia para la familia del presidente, presuntamente propiedad de uno de los contratistas de su gobierno, redujo a cero la credibilidad de la actual administración federal. “Del ‘momento mexicano’ se pasó al ‘desastre mexicano’, dice *The Financial Times*”, *Sin Embargo*, 14 de noviembre de 2014.

³⁰ Cf. “El Estado, facultado a usar la fuerza para restablecer el orden”, *La Jornada*, 16 de noviembre de 2014; cit. “Peña Nieto denuncia ‘afán orquestado para desestabilizar al país’”, *Animal Político*, 19 de noviembre de 2014. Mostrando escasa sensibilidad y menos inteligencia, el jefe de la Oficina de la Presidencia declaró a la prensa extranjera: “No vamos a sustituir las reformas por actos teatrales con gran impacto, no nos interesa crear ciclos mediáticos de éxito de 72 horas. Vamos a tener paciencia en este nuevo ciclo de reformas. No vamos a ceder aunque la plaza pública pida sangre y espectáculo ni saciar el gusto de los articulistas. Serán las instituciones las que nos saquen de la crisis, no las bravuconadas”, *El País*, 7 de diciembre de 2014.

Días antes, el EPR se había adjudicado el atentado explosivo en la tienda Soriana en Valle de Aragón (Ecatepec) en protesta por la desaparición de los 43 jóvenes y llamando a la instalación de una comisión de la verdad “compuesta por representantes de los familiares, la normal rural, de los pueblos y organizaciones independientes para investigar la desaparición de los normalistas”. Mientras tanto, los padres de los estudiantes integraron tres caravanas que recorrerían el país para exigir la presentación con vida de sus hijos. La madrugada del 20 de noviembre estallaron dos petardos en cajeros automáticos de Banamex y Scotiabank, en Naucalpan, y, por la noche, tres manifestaciones concurren en el zócalo de la ciudad de México, demandando la presentación con vida de los estudiantes. En el mitin, los padres de los desaparecidos afirmaron su deseo de cambiar “de una vez por todas este país; estamos dispuestos a mandar a la fregada estas instituciones, porque ya no sirven”. Cuando se había retirado la mayoría de los participantes, aparentemente hubo un enfrentamiento entre policías y un grupo de presuntos infiltrados pero, de acuerdo con los testimonios de los detenidos (liberados 10 días después por falta de pruebas), la policía capitalina arremetió en realidad en contra de los transeúntes³¹.

Después 20 de noviembre las movilizaciones perdieron intensidad en la ciudad de México, en el estado de Guerrero continuaron en la tónica precedente y los estudiantes del IPN lograron una muy exitosa negociación para levantar el paro en la institución y reiniciar clases en algunas escuelas a partir del 15 de diciembre, y del 7 de enero en el resto. Con su repertorio violento, los miembros de la CETEG (en plantón en el centro de Chilpancingo) atacaron las instalaciones de la procuraduría guerrerense (1 de diciembre), quemaron los bustos de los ex gobernadores de la entidad (3 de diciembre), tomaron las instalaciones del Instituto Nacional Electoral (INE) el 8 de diciembre y humillaron públicamente a dirigentes locales del PRD y Movimiento Ciudadano (MC), obligándolos a marchar por la lateral de la Autopista del Sol con pancartas que decían “somos ratas del PRD” y “fuera Peña Nieto” (9 de diciembre). Como había acordado la ANP cuando se constituyó, los padres de los estudiantes exigieron la desaparición de poderes en Guerrero, mientras los normalistas demandaron la cancelación de las elecciones de 2015, no por la evidente ingobernabilidad de la entidad, sino porque

³¹ Cf. “Se adjudica el EPR explosión en Soriana de Ecatepec”, *El Universal*, 14 de noviembre de 2014; “Salió de Tixtla la primera caravana de padres de alumnos desaparecidos”, *La Jornada*, 14 de noviembre de 2014; “Arrojan explosivos en dos bancos de Naucalpan”, *El Universal*, 20 de noviembre de 2014; cit. “El gobierno sabe dónde están los 43 normalistas”, *La Jornada*, 21 de noviembre de 2014; “Enfrentamiento frente a Palacio Nacional”, *La Jornada*, 21 de noviembre de 2014; “Salen de prisión los 11 detenidos el 20 de noviembre”, *Animal Político*, 30 de noviembre de 2014.

“las elecciones no resuelven los problemas del pueblo”. Un saldo de 25 heridos provocó el enfrentamiento del 14 de diciembre de la policía federal con maestros de la CETEG y estudiantes de Ayotzinapa³².

Conclusión

Como una forma de política popular, los movimientos sociales interpelan al poder, en particular al Estado, presentando un conjunto de demandas estructuradas que consideran deben ser atendidas. Cuando este diálogo es fluido, y las reivindicaciones legítimas, esto es, que no generen privilegios para un segmento de la sociedad sino que extiendan los derechos de todos, fortalecen la vida democrática de las sociedades (Tilly & Wood, 2010, p. 268).

Salvo el del magisterio, donde es discutible si el interés sectorial se antepone al interés general, todos los demás movimientos sociales de los que hablamos atañen no sólo a la construcción de la democracia mexicana sino reclaman el cumplimiento de las obligaciones elementales del Estado como son las de proteger a los ciudadanos o respetar (y hacer que se respeten) los derechos humanos en todo el territorio. El #Yo soy 132 puso en la mesa de discusión la relación entre los medios de comunicación (en particular la televisión) y la política, así como la necesidad de abrirlos al debate público permitiendo que se exprese la pluralidad de opiniones, condición indispensable para la solución racional de los conflictos o su conducción por vías pacíficas. Ni qué decir de las respuestas sociales hacia la inseguridad o en defensa de los derechos elementales de la población, reclamo no sólo genuino sino condición de posibilidad para que la sociedad funcione normalmente.

En estas materias las respuestas del Estado han sido sumamente pobres o inexistentes, ignorando las demandas sociales como hacía el régimen autoritario que suponíamos enterrado³³. Podrá haber avanzado la democracia mexicana en materia electoral, pero sin duda no ha modificado sustancialmente la relación

³² Cf. “Establecen fechas para reiniciar clases en el IPN”, *El Universal*, 11 de diciembre de 2014; “Vandalizan instalaciones de la procuraduría de Guerrero”, *El Universal*, 1 de diciembre de 2014; “Integrantes de la CETEG queman bustos de ex gobernadores de Guerrero y tiran reja”, *La Jornada*, 4 de diciembre de 2014; “CETEG ‘clausura’ instalaciones del INE en Guerrero”, *El Universal*, 8 de diciembre de 2014; “La CETEG retiene a miembros del Sol Azteca y los obliga a expresar ‘somos ratas del PRD’”, *La Jornada*, 10 de diciembre de 2014; “Exigen padres de los normalistas desaparecer poderes en Guerrero”, *La Jornada*, 10 de diciembre de 2014; “Aumenta la presión popular para impedir los comicios en Guerrero”, *La Jornada*, 11 de diciembre de 2014; “Choca la policía federal con maestros y normalistas, hay 25 heridos”, *El Universal*, 15 de diciembre de 2014.

³³ El ejemplo más reciente son los 10 puntos sobre seguridad dados a conocer por el presidente Peña Nieto, en los cuales responde al reclamo de justicia y a la crisis política que provocó con medidas de carácter fundamentalmente policiaco (reiterativos y carentes de una fundamentación sólida, obsecuentemente asumidos por el Legislativo), sin considerar siquiera una reforma judicial profunda y los instrumentos que permitieran llevarla a cabo. “Presenta EPN plan; lo reciben con reservas”, *El Universal*, 28 de noviembre de 2014.

entre gobernantes y gobernados, lo que es altamente preocupante. Más sí cobramos conciencia de la situación de emergencia nacional resultado de la onerosa guerra al crimen organizado, la crisis de la política de seguridad y el colapso estatal en materia de derechos humanos. Asimismo, la crisis moral de la clase política no es para celebrarse, más bien nos debería hacer mirar con incertidumbre el futuro, porque mientras no cambien las reglas del juego político y no acabe la simbiosis entre la política (micro y macro) y los grandes negocios, será muy difícil que las cosas mejoren. Esto, sin embargo, no únicamente supone un cambio institucional que acabe con lo que queda del Estado autoritario, sino trascender el bloque histórico neoliberal surgido en los ochenta de la alianza (y ahora fusión) entre el capital, un segmento (cada vez mayor) de la clase política y el crimen.

Del otro lado, la movilización social puede contribuir tanto a la democratización del régimen como a hacer explícito el inaceptable déficit de justicia que padecen amplias capas de la población. Desigualdad extrema e injusticia encienden la hoguera de la violencia social como reiteradamente hemos visto en la historia contemporánea del estado de Guerrero. Observando la virulencia alcanzada por el conflicto – desatado a partir del inapelable reclamo de la presentación con vida de los estudiantes secuestrados en Iguala –, el acendrado autoritarismo de caciques y gobernantes, la descarada presencia del crimen organizado en prácticamente toda la entidad y la actividad guerrillera desde hace medio siglo, están dadas las condiciones para un nuevo ciclo de violencia por lo que no debemos desatender las señales de advertencia que hemos observado recientemente. La quema de las sedes de los tres poderes y de las oficinas de las principales fuerzas políticas, a la vez que la pretensión de la ANP de refundar el estado desde la base evidencian la naturaleza radical del movimiento y, a juzgar por lo que hemos visto, éste carece de un interlocutor creíble en el gobierno estatal y menos en una clase política desprestigiada por el juego de complicidades que precipitaron los hechos de Iguala³⁴.

Aunque entremezclada e identificada con la misma causa, la lógica de la movilización estudiantil en la ciudad de México, y quizá la de otras partes del país, es distinta (si bien no divorciada) de la protesta guerrerense. Aquélla, pacífica en términos generales, apunta fundamentalmente hacia la matriz autoritaria que conserva el régimen mexicano, el descrédito de la clase política y el respeto a los derechos humanos. Tanto la organización en asambleas locales y la coordinación en una asamblea interuniversitaria, como la demanda de transparencia al poder ligan el nuevo activismo estudiantil con el movimiento #Yo soy 132. Ahora bien, la diferencia básica de la protesta actual con la precedente es que aquélla

³⁴ Raymundo Rivapalacio, “Guerrero: empezó la insurrección iv”, *El Sur*, 14 de noviembre de 2014. Véase Illades, , 2014a.

extendió el rechazo hacia toda la clase política mientras el movimiento de 2012 lo focalizó en el retorno del PRI.

Antes como hoy, el riesgo es que el movimiento estudiantil se disuelva por falta de un basamento que le de coherencia y continuidad cuando sobrevenga el inevitable reflujo, lo cual requeriría también la presencia de liderazgos claros que el discurso antipolítico dominante inhibe; o, también, que grupos mejor integrados y de mayor determinación (los neoanarquistas), aunque más pequeños, impongan su repertorio violento al conjunto, tal y como ocurrió en la movilización del 1 de diciembre de 2012 y con el ataque de noviembre pasado a la puerta de Palacio Nacional.

Tanto en la movilización guerrerense como en la de la ciudad de México emergió un discurso antipolítico que no podemos obviar. El primero, anclado en la tradición de la rebelión rural y en la perspectiva comunalista, asume que la organización social por sí misma generará las estructuras de gobierno, ordenándolo de abajo hacia arriba, dotado de instituciones propias de policía e impartición de justicia. Por eso, una de las reivindicaciones de la ANP es la validación de “la policía comunitaria como la *única* instancia de seguridad y justicia popular en el estado de Guerrero”³⁵. Llegado el momento, el conjunto de pueblos soberanos reunidos en la nación integrarían el Estado. Visto de esta manera, la política sería innecesaria.

El antipoliticismo de los jóvenes, salvo los neonanarquistas que intentan acabar con toda política, es más bien apartidista, en la línea de que los intereses partidarios fragmentan el movimiento social y, parasitariamente, viven a expensas de él. El supuesto, sin duda endeble, es que lo social es bueno en sí mismo y la política (entendida en su forma partidaria) lo contrario. También, todo lo que vaya en dirección de disminuir la horizontalidad de la organización o cualquier tentativa de hacer permanentes los representantes se presume nocivo. Lamentablemente, la ilusión de clausurar la política resta proyección al movimiento y permite que ese espacio lo llenen otros (la Primavera árabe dejó importantes enseñanzas al respecto). Y, peor en la circunstancia presente, arrebató a la sociedad la oportunidad de acabar con la clase política corrupta y de edificar la indispensable política sobre bases nuevas.

Referencias

AGAMBEN, Giorgio. El gobierno de la inseguridad. In: LAVAL et. alli. *Pensar desde la izquierda. Mapa del pensamiento crítico para un tiempo de crisis*. Madrid: Errata Naturae, 2012, pp. 25-35.

³⁵ Cf. *Plan de acción de la Escuela Rural de Ayotzinapa y organizaciones sociales estatales en la Asamblea Popular #Ayotzinapa*, 2014. Énfasis añadido.

- BARTRA, Roger. La abeja, la araña y las moscas. In: *Fractal*, núm. 63, 2011, pp. 101-108.
- CASTELLS, Manuel. *Redes de indignación y esperanza*. Madrid: Alianza, 2012.
- DE MAULEÓN, Héctor. De la red a las calles. In: *Nexos en línea*, septiembre 2012.
- ESTRADA SAAVEDRA, Marco. Sistema de protesta: política, medios y el #Yo soy 132. In: *Sociológica*, vol. XXIX, núm. 82, 2014, pp. 83-123.
- GUERRERO GUTIÉRREZ, Eduardo. La dictadura criminal. In: *Nexos*, abril de 2014, pp. 44-52.
- HOPE, Alejandro. Violencia 2007-2011. La tormenta perfecta. In: *Nexos*, noviembre de 2013, pp. 36-41.
- IGLESIAS, Pablo. *Disputar la democracia*. Política para tiempos de crisis. Madrid: Akal, 2014.
- ILLADES, Carlos. Guerrero: La violencia circular. In: *Nexos*, noviembre de 2014a, pp. 32-42.
- _____. El retorno del anarquismo. Violencia y protesta pública en el México actual. In: *Sociología Histórica* (Murcia), núm. 4, 2014b, pp. 411-434. .
- ILLADES & SANTIAGO, Teresa. *Estado de guerra*. De la guerra sucia a la narcoguerra. México: Era, 2014.
- JAMESON, Fredric. *Representar "El capital"*. Una lectura del tomo 1. México: FCE, 2013.
- LACLAU, Ernesto. *La razón populista*. Buenos Aires: FCE, 2005.
- LAVAL, Christian y otros, *Pensar desde la izquierda. Mapa del pensamiento crítico para un tiempo de crisis* (Madrid, Errata Naturae, 2012).
- RIVERA VELÁZQUEZ, Jaime, El abismo michoacano. In: *Nexos*, septiembre de 2013, pp. 44-51.
- SICILIA, Javier, *Estamos hasta la madre*. México: Planeta, 2011.
- TARROW, Sidney G. *El poder en movimiento*. Los movimientos sociales, la acción colectiva y la política. Madrid: Alianza, 2012, 3ª ed.
- TILLY, Charles & WOOD, Lesley J. *Los movimientos sociales, 1768-2008*. Desde los orígenes hasta Facebook. Barcelona: Crítica, 2010.
- TOURAINÉ, Alain. *Después de la crisis*. México: FCE, 2013.
- ŽIŽEK, Slavoj. *El año que soñamos peligrosamente*. Madrid: Akal, 2013.

Documentos

- Asamblea Nacional Popular, *Plan de acción de la Escuela Rural de Ayotzinapa y organizaciones sociales estatales en la Asamblea Nacional Popular #Ayotzinapa*, 15 de octubre de 2014.
- Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), Identificación de uno de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, 7 de diciembre de 2014.
- UPOEG, ¿Quiénes somos?, 2014, 5pp.

Hemerografía

El Economista, México D.F.

El País, Madrid.

EL Sur, Acapulco, Gro.

El Universal, México D.F.

Excélsior, México D.F.

La Jornada, México D.F.

Milenio, México D.F.

Sin Embargo, México D.F.

Recebido em 25 de abril de 2015

Aprovado em 18 de maio de 2015